





ás de 5 millones de toneladas de escombros, en un área de 75 hectáreas, se removerán de la Escombrera, un vertedero ubicado en la parte alta de la Comuna 13 de Medellín, luego del fallo jurídico dictado por la confesión de varios paramilitares, entre ellos "Don Berna", jefe del bloque Cacique Nutibara de las AUC, que ubica ese lugar, como una de las fosas comunes que utilizaron en la década del 2000.

La investigación en la Escombrera, es un logro de la lucha persistente de las víctimas, organizaciones defensoras de Derechos Humanos ψ populares; quienes mantuvieron viva la búsqueda de verdad ψ justicia, a pesar del silencio ψ la negación del gobierno departamental ψ nacional durante estos trece años.

La remoción de escombros ψ la identificación de las personas asesinadas ψ desaparecidas por los grupos paramilitares, es el primer paso en la búsqueda de verdad. Sin embargo, la construcción de una paz estable ψ la no repetición de hechos como los vividos en

esta Comuna, requieren el compromiso real del Estado para reconocer su responsabilidad directa y esclarecer las dinámicas propias de los conflictos urbanos y la urbanización del conflicto armado, para poder superarlos.

Para el modelo urbano que se quiere imponer con el proyecto paramilitar, el control sobre el sector de la comuna 13 y sus 22 barrios resultaba estratégico, por ser corredor para la salida del narcotráfico y por considerarse un territorio en resistencia popular contra el paramilitaris-

mo, que ya invadía gran parte del territorio antioqueño.

Las operaciones Mariscal y Orión, que son el inicio del periodo de desapariciones y asesinatos masivos en las esas comunas, fueron ordenadas directamente por el presidente Álvaro Uribe Vélez y dirigidas por el comandante de la IV Brigada, el General Mario Montoya, hoy implicado en las investigaciones sobre los falsos positivos. Estas grandes operaciones de las Fuerzas Armadas, obedecen a la estrategia estatal de "despeje" del territorio urbano, para

su posterior copamiento con sus fuerzas paramilitares.

El 21 de Mayo de 2002 se desarrolla la Operación Mariscal, con un despliegue de casi 900 efectivos de la policía, las Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea, con el acompañamiento de la Fiscalía y el CTI. Bajo el discurso de retomar el control de la zona en manos de la insurgencia y "pacificarla", se atacó a la comunidad durante doce horas. La rápida respuesta de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de la comunidad, impidió que la operación se desarrollara plenamente y que los paramilitares que esperaban la orden de entrada, tuvieran que replegarse.

Para el 16 de Octubre del mismo año, la operación Orión inicia con el despliegue de 3.000 efectivos, sincronizados con cientos de paramilitares encapuchados y uniformados. La toma de los barrios Belencito, El Corazón, 20 de Julio, el Salado, Independencia, Nuevos Conquistadores, se hizo utilizando helicópteros Black Hawk, ametralladoras M60, fusiles, tanquetas y acordonando la zona para impedir el ingreso de organismos defensores de Derechos Humanos y medios de comunicación. El día terminaba con un saldo de 8 desaparecidos, un civil muerto, 38 heridos y 355 detenidos, acusados de ser milicianos.

A partir de estas operaciones y bajo la militarización absoluta de la zona, se inicia el asesinato y la desaparición sistemática de los habitantes, muchos de ellos líderes comunales. Los enfrentamientos se reducen a cero, pero las muertes se mantienen e incrementan, así como las detenciones masivas y señalamientos públicos a habitantes de ser milicianos o colaboradores de la insurgencia.

De esta forma, Uribe traslada el destierro masivo a las ciudades, fenómeno de despoblamiento que se venía aplicando para el campo. Las viviendas desocupadas, fueron ocupadas por paramilitares activos y "desmovilizados".

Contrario a la versión de los medios de comunicación y del mismo presidente Uribe, lo que hubo fue un ataque indiscriminado a la población, un desmembramiento del tejido social y la implantación, mediante el terrorismo, de un estado paramilitar urbano que aún hoy pervive.

La presencia del paramilitarismo en las ciudades garantiza la modernización urbana que se busca imponer. Centros de desarrollo financiero y administrativo, atractivos para la inversión privada y extranjera, manteniendo en la marginalidad y el control militar a la mayor parte de la población urbana, que subsiste en la informalidad de la economía del rebusque y bajo el miedo de las redes que ha generado el narcotráfico y las bandas de sicarios, prestos a eliminar cualquier asomo de inconformidad social o política.

Éste es un momento importante, donde las víctimas y sus organizaciones han logrado que, literalmente, no se le eche más tierra a la injusticia y debe ser un momento importante para que el pueblo colombiano exija la verdad sobre las acciones

terroristas del Estado en asocio con sus grupos paramilitares, contra la población.

También es el momento para que, se reflexione profundamente, en las instancias institucionales y políticas, sobre los problemas que se viven en las ciudades, los conflictos profundos que se han generado allí, producto de las grandes desigualdades sociales y la guerra sucia, que sustentan el modelo de desarrollo urbano en el país.

La paz implica erradicar la doctrina terrorista del Estado y sancionar a los criminales de guerra que la impulsan, como los autores materiales e intelectuales que masacraron a quienes se encuentran en la gran fosa común de La Escombrera.



on la llegada al gobierno de Juan Manuel Santos, una nueva realidad ha marcado el panorama político en el país, el Centro Democrático liderado por Álvaro Uribe Vélez ha irrumpido con fuerza, autoproclamándose como el partido de "oposición" y, favorecido por los grandes medios de comunicación, logra una potente y permanente plataforma para la difusión de sus planteamientos.

Las declaraciones del uribismo, se posicionan en la opinión pública como escándalo mediático y han pretendido mostrar una ruptura irreconciliable con Santos, gestada alrededor de la disyuntiva guerra o paz, ocultando la alianza estratégica que ambos sectores mantienen con respecto a un proyecto común de dominación de clase y promoviendo la idea que sólo existen dos fuerzas políticas capaces de conducir los destinos del país: La derecha o la ultra derecha.

El significado de la oposición política en Colombia

Pero ser de oposición, significa estar en contra del actual modelo de explotación, depredación y dependencia económica y contra el régimen de exclusión, sometimiento y corrupción política. Ser de oposición, significa defender una propuesta alternativa y trabajar por un Estado y un gobierno verdaderamente democrático, soberano, equitativo, digno y justo.

Históricamente la oposición política en Colombia ha sido considerada como un enemigo a aniquilar por la elite gobernante. La "democracia más antigua de América Latina" se ha sostenido a partir de la prohibición del derecho a disentir frente a las políticas excluyentes del régimen oligárquico, mediante el uso sistemático de la represión y el terrorismo de Estado.

Así lo han demostrado con el exterminio físico del proyecto político gaitanista, asesinando en 1948 a su máximo líder Jorge Eliecer Gaitán y prolongando por décadas su política de tierra arrasada; el asesinato de miles de militantes de la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Popular en la década de los 80; el encarcelamiento de miles de luchadores y luchadoras sociales; y el exilio de otros tantos.

do hasta hoy en un modelo de gobierno efectivo para el mantenimiento del poder político en manos de las elites del país.

Pese a esta realidad innegable los sectores populares han

Pese a esta realidad innegable los sectores populares han construido proyectos políticos de oposición, de alcance regional y nacional, que buscan transformaciones en materia social, política y económica que favorezcan los intereses de las mayorías pobres del país.

Actualmente tanto los proyectos políticos insurgentes surgidos hace más de 50 años, como los movimientos sociales y políticos de izquierda surgidos durante las últimas décadas, configuran una verdadera corriente de oposición en abierta contradicción con los intereses de la oligarquía, y por eso buscan ser despolitizados, criminalizados, cooptados o eliminados.

Aunque durante los últimos 20 años se han expedido diferentes leyes que buscan crear reglas de juego para hacer oposición política en el país, el modelo de exclusión política instaurado por la oligarquía liberal-conservadora con el Frente Nacional desde 1959, se ha converti-



El proyecto uribista

El uribismo hace parte del bloque dominante y representa a una elite ligada a la gran tenencia de la tierra, a gamonales políticos regionales, a los sectores emergentes del narcoparamilitarismo con todos los sectores económicos conexos con el lavado de los narcocapitales, así como a sectores políticos y militares guerreristas de extrema derecha, que han hecho de la disyuntiva entre la paz y la

guerra el punto nodal de sus diferencias con el actual gobierno.

El uribismo pretende ser un partido neofascista moderno, ligado a otros esfuerzos similares en el continente y el mundo. Quiere convertirse en un fenómeno de masas, con un lenguaje para cautivar a los sectores de las clases medias, por eso se presenta como Centro Democrático, pero practican la militarización de la sociedad, la eliminación de la oposición y no

representa una propuesta alternativa en el manejo político, social y económico del país.

El saqueo que representa la denominada transnacionalización de la economía, la privatización de los bienes públicos, la continuidad del modelo extractivista que no genera empleo y que destruye el medio ambiente o los monocultivos agroindustriales son temas que no se cuestionan en la ficticia agenda de oposición del uribismo.

Más que oposición, asistimos a una disputa de intereses en el bloque dominante por la repartija del poder, en donde los ejes centrales que guían el modelo de país diseñado por las elites y el imperio norteamericano siguen siendo acuerdos tácitos incuestionables.

Resignificar la oposición política: una tarea urgente

La debilidad de la oposición colombiana, se explica en buena parte por la persecución y aniquilamiento del terrorismo estatal. Sin embargo, el predominio de los sectores de la derecha en el panorama político nacional, se ha dado también como consecuencia de la tímida, dispersa y sectaria actuación de los sectores de izquierda en el país. La formación de liderazgos nacionales, de referentes políticos amplios e incluyentes y de una agenda política alternativa, construida en consenso con la ciudadanía, junto a las luchas sociales, contra la criminalización y por garantías para la participación de los sectores de la oposición, se constituyen hoy en los principales retos para el bloque popular en Colombia.

Urge por tanto la reconstrucción de una agenda pública unitaria, que recoja el sentir de los sectores populares, de las capas medias, de los amplios sectores democráticos, así como de los movimientos políticos y sociales que compartan una propuesta de transformación nacional, que se plantee como objetivos la soberanía y la paz con justicia social.

Es necesario que la izquierda colombiana se legitime ante la opinión pública, mostrando una nueva forma y contenido para la oposición política, reivindicando la lucha contra la corrupción y el clientelismo, por la ética y el valor de la palabra en el quehacer político, pero además posicionando una propuesta de país, construida democráticamente y puesta en función de las grandes mayorías, de su bienestar, de su dignidad y de su felicidad.





I litoral Pacífico colombiano, con 83.160 km2, es parte del ajedrez geoestratégico de los intereses no sólo comerciales y económicos de las grandes potencias y multinacionales, sino que es nervio sustancial de la seguridad y defensa de las potencias del mundo, especialmente en las maniobras del Imperialismo norteamericano por reacomodar su resquebrajada hegemonía global y mitigar su crisis económica-financiera.

La panacea de la muerte

La Alianza Pacífico promovida por el Imperialismo norteamericano, nace en reemplazo de su derrotado ALCA, asegurando el plan de libre comercio esencia del neoliberalismo y en contrapeso de la nueva institucionalidad construida en nuestra América. A esto se le suma que el Océano Pacífico es corredor vital para la seguridad y defensa Imperial por su extensión, profundidad y por ser puerta de entrada y salida a la más grande superficie terrestre continental y hacia los mercados más numerosos del mundo.

En esta alianza, el gobierno colombiano, se presenta como adalid, que junto a sus homólogos México, Chile, Perú y posiblemente, Panamá y Costa Rica, despejan el camino a las multinacionales del Imperio, para el saqueo de nuestros recursos y la construcción de la infraestructura necesaria, para completar el ciclo de expoliación de los territorios que tienen costa sobre el Pacífico, adecuando además nuestra legislación a sus planes y mandatos.

Vertientes de dolor y resistencia en el Pacífico colombiano

Los 4 departamentos colombianos que tienen costa sobre el Pacífico, tienen características específicas que los hacen diferentes al resto del país. Allí se concentra la mayor parte de las etnias indígenas y afro-descendientes, de los recursos naturales (minerales, biodiversidad), pero a la vez se ha vivido un abandono total por parte del Estado, presentando los índices más bajos del país en los derechos sociales, económicos y políticos. En la región pacífico, el proyecto paramilitar se ha implantado violentamente, como política necesaria para la acumulación del capital transnacional y nacional, por medio del despojo de las comunidades.

A pesar del hambre y la miseria, las comunidades del Pacífico, han resistido estos embates de exclusión y expoliación. Desde la invasión y colonización europea, hasta hou en pleno siglo XXI, sus organizaciones sociales, indígenas, afro-descendientes, agrarias, de mujeres, de jóvenes, ecológicas y de Derechos Humanos, se levantan contra toda forma de aniquilamiento social, cultural, económico y por la vida y los derechos de la Pachamama. Pareciera que organizarse, hace parte de los genes de los habitantes de la región del Arco Iris.



Emblema de viejas concepciones aniquiladoras

Basta repasar la historia reciente de Colombia, para encontrar testimonios de la implementación, por parte de la burguesía, del llamado capitalismo del schok (Naomi Klein), que ordena aterrorizar a la población para hacer avanzar los proyectos de "desarrollo" y "modernización" propios del capitalismo neoliberal. Una metodología utilizada de tiempo atrás, donde sean necesarios territorios. para la extracción, producción y comercio; donde la gente no vale y si estorba.

En Colombia se evidencia hace rato la estrategia Imperial de Dominación en amplio espectro (Ana Ester Ceceña) donde al capital ya no le interesa la gente, ni como fuerza de trabajo, ni como consumidores, porque no tienen ingresos de ninguna índole, pero sí codicion los territorios que habitan los pobres, porque son lugares con inmensas riquezas y necesarios para obras de implantación, ampliación, modernización y aseguramiento de los proyectos económicos del gran capital.

Colombia es apetecida por los países imperialistas y sus empresas transnacionales por su ubicación geográfica y riquezas, apetito que aumenta por la ubicación estratégica, comercial y militar, de lugares como el principal puerto colombiano, Buenaventura.

El ícono de la infamia

Buenaventura ha sido designada como la capital de la Alianza del Pacífico (Santos J.M. 2012), aunque no contemple en sus planes a sus habitantes. Por el contrario, cada día se dispara la marginalidad y la violencia para-estatal, dejando cientos de muertos, desaparecidos y miles de pobres. Muestra de ello es que, las tasas de desempleo, criminalidad y pobreza son la más altas del país.

Los medios de comunicación señalan estos resultados de barbarie como consecuencia de la delincuencia y el narcotráfico, ocultando las consecuencias desastrosas que han traído los megaproyectos de modernización y ampliación del puerto.

Un muro electrificado protegido metro a metro por centenares

de miembros de las fuerzas militares y guardias privados, separa el puerto del resto de la ciudad. En el primero la modernización y la tecnología son el sello del espacio; el segundo, una ciudad llena de necesidades, hambre, miseria y muerte, donde el desempleo y la inseguridad carcomen las esperanzas de vida de sus habitantes.

A finales de la década de 1980 trabajaban en el puerto 2500 trabajadores, en la actualidad la Sociedad Portuaria emplea solo a 181, (Oscar Dalmario). La Armada ha prohibido a los pescadores locales salir a pescar de noche y les raciona la cantidad de combustible. Las pesqueras colombianas en Buenaventura han quebrado.

Buenaventura y demás territorios inscritos en los planes de la Alianza del Pacífico, seguirán amenazados de muerte, mientras los capitales nacionales y extranjeros amplíen su riqueza y su voracidad.

Visibilizar el impacto de la Alianza Pacífico para los territorios costeros, sus habitantes y el ecosistema, es tarea urgente de los defensores de la vida de la naturaleza y la humanidad, es tarea inaplazable en un país no soberano, depredador e inhumano. El Pacífico nos debe doler a toda Colombia.



SINPAL: ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS TRABAJADORES DE ECOPETROL?

MANUEL: En el marco del llamado proceso de reestructuración de Ecopetrol iniciado por la administración de Juan Carlos Echeverry, se inició un despido masivo de trabajadores en las áreas de exploración, de refinación y de producción. De los casi de 35.000 trabajadores tercerizados por Ecopetrol, se han despedido cerca de 15.000.

Esto ha sido posible, aprovechándose de un contrato de trabajo que tiene intermediación laboral a través de más de 3500 empresas que contratan con Ecopetrol en el área de servicios y en el área operativa, esto ha creado todo un problema social en las áreas petroleras que ha llevado a las últimas protestas y reclamos que han hecho las comunidades por el desempleo generado a partir de las medidas tomadas por la empresa.

No ha bastado con el despido de trabajadores tercerizados, además se anunció el despido de cerca de 2.000 trabajadores de la nómina directa de Ecopetrol, de los 8.000 trabajadores de dicha nómina. Hasta el momento van alrededor de 70 trabajadores despedidos.

Los trabajadores petroleros luchan contra la tercerización, que ha fomentado los temporales y contratistas, a quienes se les quita la

estabilidad laboral y desmejora sus sueldos y prestaciones. Se exige que se vuelva al modelo de contratación directa.

La reestructuración se ha impuesto sobre el argumento de la crisis mundial de los precios del petróleo, que no es otra cosa que un movimiento cíclico al cual está sometida la industria petrolera, y que no es un fenómeno nuevo, ha sucedido históricamente y se da como producto de la dinámica de la oferta y la demanda, también por los intereses que se mueven en los países productores y consumidores del recurso natural.

SINPAL: ¿CÓMO AFECTA LA TERCERIZACIÓN AL SECTOR PETROLERO?

MANUEL: La afectación es alta porque en Colombia no hay libertad sindical y la precariedad de los trabajadores es utilizada de manera perversa por las empresas y empresarios incluida Ecopetrol, coaccionando y coartando el derecho de asociación sindical, pues al mantener la precariedad de los contratos, mantiene una sensación de inseguridad entre los trabajadores que les lleva a tomar la determinación de no afiliarse a la organización sindical.

De los más de 150.000 trabajadores de la industria del petróleo sólo 27.000 hacen parte del sindicato, u esta población es fluctuante porque varía de acuerdo al nivel de contratación, tenemos el caso de los llamados "contratos veintiocheros", que son contratos de 28 días que al terminar el trabajador no sabe si volverá a ser contratado.

Esto está rompiendo con la vocación agraria de muchas zonas, en donde los campesinos empiezan a ver la industria petrolera como una salida a sus necesidades, trabajando 28 días mediante una rotación que establecen las asociaciones de juntas comunales, que han sido cooptadas por las multinacionales, generando altos niveles de corrupción de los dirigentes de las mismas y condicionando la contratación a que no se sindicalicen.

El caso de Pacific Rubiales da cuenta de ello, allí se ve claramente este condicionamiento pues la renuncia al sindicato significa posibilidad de empleo, así el trabajador ve sus derechos vulnerados, desde el derecho más básico que es el de asociación. De igual manera se ven afectados los derechos humanos ya que en estas zonas se da una simbiosis entre multinacionales y paramilitarismo.

SINPAL: DESDE HACE ALGUNOS MESES, ECOPETROL CUENTA CON UNA NUEVA GERENCIA ¿QUÉ CAMBIOS HA IMPLICADO, EN TÉRMINOS DE LAS CONTRATACIONES, LOS RELACIONAMIENTOS CON EL GOBIERNO Y OTRAS EMPRESAS?

MANUEL: Lo primero es que con el cambio se establece una reestructuración que se traduce en el despido masivo de trabajadores.

En segundo lugar el único cargo político que había hasta ahora era la presidencia, hoy la nueva presidencia ha anunciado la vinculación de al menos 40 funcionarios externos, que indudablemente son cuotas po-

líticas que se enquistan en la administración de la empresa. Esto afecta en la medida en que Ecopetrol se va convirtiendo en una empresa de cargos burocráticos para entregárselos a la clase politiquera del país, entregándoles sectores estratégicos como la producción o el tratamiento de proyectos.

Por otra parte, las empresas petroleras se valoran por sus reservas y el país solamente tiene una reserva de 2300 millones de barriles. Teniendo en cuenta producción actual de casi 1 millón de barriles, Colombia estaría en 6 años importando crudo, si no encuentra nuevos yacimientos. Esto sumado a la

caída de los precios del petróleo llevó a que Ecopetrol pasara de valer \$150 billones a valer \$60 billones, cayendo en más del 60 por ciento de su valor nominal.

Sumado a esto, Ecopetrol ha comprometido sus bienes de capital en casi \$35 billones a través de préstamos a la banca multilateral y ha comprometido recursos con bonos de altos intereses que tienen que pagarse en los diferentes mercados bursátiles.

Hoy Ecopetrol cruza por una gran dificultad, que se agudiza con la llegada de Juan Carlos Echeverry, quien viene de ser asesor del Banco Mundial, que tiene como carta de presenta-

ción la famosa frase que acuñó como ministro de hacienda de "repartir la mermelada" y que how ha visto a Ecopetrol como un gran tarro de mermelada, el cual empezó a repartir a los politiqueros. Así mismo, va despidiendo funcionarios que representaban un capital humano comprometido y con sentido de pertenencia hacia la empresa, con una cultura empresarial, totalmente diferente a la que hou se quiere implementar en Ecopetrol para darle el zarpazo final.

No nos cabe ninguna duda que Echeverry viene a terminar el proceso de privatización de la primera empresa estatal y el

principal patrimonio público que hou les queda a los colombianos y colombianas.

SINPAL: ¿CUÁLES SON LAS LU-CHAS QUE DEBEN AFRONTAR LOS TRABAJADORES PETROLE-ROS?

MANUEL: Este modelo de reestructuración, se constituue en una agresión contra los trabajadores y su organización, que viola la convención colectiva de trabajo y desconoce el reciente acuerdo realizado entre Ecopetrol y su sindicato.

La última asamblea de delegados de los trabajadores afiliados a la USO (Unión Sindical Obrera), aprobó convocar a un Paro Nacional Petrolero, que busca la participación no solo de los trabajadores de Ecopetrol, sino además de los trabajadores de las multinacionales, así como de las comunidades

afectadas y pauperizadas por las políticas de exploración y producción irresponsable con la que las empresas petroleras vienen desarrollando sus proyectos y que tienen impactos negativos en lo social, lo económico y ambiental.

El Paro que se está proyectando, no sólo se propone alrededor del conflicto laboral, sino que además busca una revisión de la política petrolera en el país, para lo cual viene impulsando un proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos, que se viene construyendo desde hace 3 años y que se presentará a diferentes estamentos de la sociedad (académicos, campesinos, trabajadores, etc) buscando el enriquecimiento de la propuesta y su inclusión dentro de la legislación petrolera, mediante la fuerza de la movilización social.



os recientes acontecimientos contra el gobierno de Bolivia, ratifican la puesta en marcha de una contraofensiva imperial en el continente, para reversar los procesos democráticos y revolucionarios, que han colocado la soberanía e independencia de nuestros pueblos, como base de una sociedad distinta a la capitalista.

La derecha internacional se ha unificado en pos de este objetivo, con una estrategia que combina todas las formas de lucha, todos los medios posibles, instalando una matriz de opinión contra el "Castro-Chavismo", concepto en el que enmarcan todas las luchas anticoloniales, antimperialistas y de liberación de los pueblos.

Para el imperialismo, los gobiernos democráticos y transformadores de nuestra América, y las luchas de sus pueblos, son expresión de una perversidad política e ideológica proveniente de Cuba y Venezuela, proyectos vistos como dictatoriales. Para el imperio, estos países revolucionarios, junto a Ecuador y Bolivia, son el nuevo eje del mal del continente, contra quienes tienen enfilados todos sus arsenales golpistas.

En las estructuras de opresión y explotación del capitalismo que han desarrollado durante siglos, encadenando a nuestros pueblos a la miseria, al hambre y la injusticia, han obligando a desarrollar batallas por las dignidad como única salida y desconocen de estos procesos sus milenarias raíces libertarias.

El Imperio manipula los Derechos Humanos

Para sustentar toda la escalada de desestabilización en América, el imperialismo sostiene que los gobiernos de izquierda son violadores de los derechos humanos y pretende posicionarse como defensor de estos, de la democracia y la paz; realidad que cae por su propio peso.

Sin excepción alguna, todos los gobiernos progresistas y de izquierda del continente, vienen impulsando políticas de inclusión social, superando los niveles de pobreza y hambre que hace décadas reinaban. Los altos niveles de analfabetismo, la carencia del derecho a la salud, vivienda, seguridad social y servicios básicos, se ha superado ostensiblemente.

Hay una redistribución de la renta y los ingresos, donde el Estado es promotor directo, reduciendo el monopolio de los sujetos privados. Importantes han sido las nacionalizaciones emprendidas en Venezuela, Ecuador y Bolivia, porque dan mayores posibilidades al impulso de políticas sociales. Los ingresos de estas naciones van siendo direccionados hacia lo

público; incluso las elites oligárquicas, se han beneficiado de todos estos cambios económicos.

La democratización de la política avanza y son protagónicos los sujetos populares, participando en las grandes decisiones políticas y los rumbos del país, construyendo así un poder negado, por la democracia burguesa.

El imperialismo y la derecha mundial, temen los avances sociales, políticos y culturales de los pueblos, porque son ejemplos, que pueden seguir impactando positivamente en el despertar de los pueblos.

Por eso la manipulación discursiva sobre la defensa de los Derechos Humanos, justifica las agresiones y ataques para derrocar a los gobiernos de izquierdas, pues si el cumplimiento de los Derechos Humanos fuera un rasero para juzgar gobiernos, serían los Estados Unidos, España, Inglaterra, Colombia los primeros en ser condenados como responsables de su violación sistemática y del terrorismo de Estado.

La derecha combina todas las formas de lucha

En la contraofensiva de la derecha mundial hacia el continente, se han creado organizaciones que despliegan su acción de muchas formas: movilizaciones masivas llamando al derrocamiento de los gobiernos, organización de grupos armados de derecha que sabotean los procesos sociales, restándole dinámica y posicionamiento a las instituciones populares, intimidando a la población, paralizando los programas y acciones afirmativas gubernamentales. Grupos armados contrarevolucionarios llenos de mercenarios de tintes fascistas.

Las formas organizativas son diversas, sobresalen los comités cívicos en Bolivia, las guarimbas en Venezuela, las marchas de banderas negras en Ecuador, todos con varios intentos golpistas, donde se agrupa la derecha y los partidos políticos de claro corte burqués, en fin, cada país va adoptando diferentes maneras y formas, con el objetivo de organizar una fuerza de choque procapitalista e imperialista, que propicie los golpes de timón, para el regreso del capitalismo salvaje.

Por la unidad revolucionaria continental

Por otro lado, los pueblos de Guatemala y Honduras vienen en una batalla política contra la corrupción, haciendo de ésta, una bandera de movilización política-ética, que dignifique la política. Incluso vienen promoviendo la necesidad de una nueva gobernabilidad.

La dignificación de la política, tiene que ser un asunto central en los actuales gobiernos de izquierda del continente, profundizando la batalla al interior de partidos e instituciones, pues es una estrategia política aprovechar al máximo las debilidades de los procesos transformadores, para debilitar las bases de soporte social y político.

En estos momentos de contraofensiva imperial, hay que retomar la unidad de los revolucionarios, del movimiento popular, en un diálogo permanente con los gobiernos de izquierda, para avanzar en un nuevo pacto social, que relance de manera vigorosa la resistencia al imperialismo, unifique el discurso y la acción revolucionaria, retomando el ideal camilista de encontrarnos en lo que nos identifica y prescindir de lo que nos separa y reconociendo el enemigo común: el imperialismo y las oligarquías.

No nos perdonaría la historia que los fraccionamientos y disentimientos en el seno del pueblo, sigan debilitando la causa popular y revolucionaria. El movimiento social, popular y

democrático del continente, no puede permanecer dividido e ineficaz en la lucha por la preservación y permanencia de los gobiernos de la izquierda, pues la agresión no es sólo hacia los gobiernos, sino hacia todo el acumulado popular del continente.

Ante la guerra económica del imperio hay que desatar la fuerza comunal, la fuerza popular y de los trabajadores para el control del abastecimiento, para reorganizar la distribución, combatir la corrupción y fortalecer la gestión desde abajo complementaria con los esfuerzos institucionales.

De igual manera hay que retomar la iniciativa política como un hecho y acontecimiento continental. Cada gobierno de izquierda no puede enfrentar la contraofensiva aisladamente. Los foros de la Alba, de la Celac, de Unasur y otros deben activarse de cara a este momento decisivo en la lucha antiimperialista, democrática y de revolución del Buen Vivir.

Es el momento de levantar las banderas de Martí y Bolívar por la unidad y conscientes que nuestra patria es América.



